
 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	CÓDIGO: CSJCF-GD-F04	
	ACUSE DE RECIBIDO: ACUSE DE RECIBIDO PARA LOS DOCUMENTOS ENTRANTES PARA LOS DESPACHOS	VERSIÓN: 2	

Centro de Servicios Judiciales Civil y Familia - Manizales
En Apoyo a los Juzgados Laborales del Circuito de Manizales

Acuse de Recibido

Fecha: Martes 21 de mayo del 2024

Hora: 8:37:46 am

Se ha registrado en el sistema, la carga de **1 Archivo(s)** suscrito(s) a nombre de; **DANIEL QUINTERO BLANDON**, con el radicado; **202400024**, correo electrónico registrado; **mmaabogado04@gmail.com**, dirigido(s) al **JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO**.

Si necesita comunicarse con el Centro de Servicios, puede hacerlo dentro de los horarios establecidos al teléfono de atención al usuario, **(606) 8879620 ext. 11611**

Archivo(s) Cargado(s)	Archivo(s) Cargado(s)
202400024CONTESTACION.pdf	

CÓDIGO DE RECIBIDO: AR-17001-20240521083746-RJC-17208



DANIEL QUINTERO BLANDON <mmaabogado04@gmail.com>

**CONTESTACION DE LA DEMANDA Y ANEXOS FABIO YEPES MONCADA RAD.
17001310500420240002400**

1 mensaje

DANIEL QUINTERO BLANDON <mmaabogado04@gmail.com>

21 de mayo de 2024, 13:00

Para: marthainesdiazabogada@hotmail.com

Cordial saludo

Señor(a)**Apoderado (a) Parte demandante**

DANIEL QUINTERO BLANDÓN apoderado sustituto de la Administradora de Pensiones Colpensiones, de conformidad con el inciso 1° del artículo 3° de la Ley 2213 de 2022, según el cual “[es deber de los sujetos procesales, realizar sus actuaciones y asistir a las audiencias y diligencias a través de medios tecnológicos. Para el efecto deberán suministrar a la autoridad judicial competente, y a todos los demás sujetos procesales, los canales digitales elegidos para los fines del proceso o trámite y enviar a través de estos un ejemplar de todos los memoriales o actuaciones que realicen, simultáneamente con copia incorporada al mensaje enviado a la autoridad judicial (...)”, adjunto la contestación de la demanda dentro del proceso Radicado 17001310500420240002400 promovida por FABIO YEPES MONCADA.

Por favor confirmar recibido.

Atentamente,

DANIEL QUINTERO BLANDON

CC. 1.088.313.478 de Pereira

T.P 305.744 del C.S. de la J

Tel: 3122794575

**CONTESTACION202400024.pdf**

7616K

Doctora
MARTHA INES RUIZ GIRALDO
JUEZ TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO
MANIZALES

Referencia: PROCESO ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA
Demandante: FABIO YEPES MONCADA
Demandados: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES
AFP PORVENIR S.A
Radicado: 17001310500320240002400
Asunto: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

DANIEL QUINTERO BLANDON, abogado en ejercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No. 305.744 del C.S. de la J, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.088.313.478 de Pereira, actuando en calidad de apoderado judicial sustituto de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, conforme a la sustitución realizada por el **Dr. SANTIAGO MUÑOZ MEDINA**, mayor de edad, vecino y residente en Cali-Valle, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.915.453 expedida en Cali, quien obra en condición de representante legal suplente de la sociedad **MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S.** apoderado judicial principal de la entidad, encontrándome dentro del término oportuno, respetuosamente procedo a subsanar la contestación de la demanda ordinaria laboral de primera instancia promovida por **FABIO YEPES MONCADA**, en los siguientes términos

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ENTIDAD DEMANDADA, REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO

La **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como Entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio del Trabajo, para que ejerza las funciones señaladas en el Decreto 309 del 24 de febrero de 2017 y en las disposiciones legales vigentes, con la finalidad de otorgar los derechos y beneficios establecidos por el sistema general de seguridad social consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia.

De conformidad con el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, hace parte del Sistema General de Pensiones y tiene por objeto la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005 y las demás prestaciones especiales que determine la Constitución y la Ley, en su calidad de Entidad financiera de carácter especial.

La representación legal la ejerce el Doctor **JAIME DUSSAN CALDERON**, como presidente de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**.

El domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 10 No. 72-33 Torre B piso 11, No. Telefónico: 217-0100.

I. FRENTE A LOS HECHOS

HECHO 1: ES CIERTO, de conformidad con la cedula de ciudadanía de la demandante.

HECHO 2: ES CIERTO, toda vez que de conformidad con la historia laboral de la demandante.

HECHO 3: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 4: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 5: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 6: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 7: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 8: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 9: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 10: NO ES UN HECHO, es una manifestación subjetiva de la parte demandante que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 11: NO ES UN HECHO, es una manifestación subjetiva de la parte demandante que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 11: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 12: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 13: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 14: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 15: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 16: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 17: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 18: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 19: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 20: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 21: NO ES UN HECHO, es una manifestación subjetiva de la parte demandante que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 22: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 23: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso.

HECHO 24: ES CIERTO, de conformidad con el expediente administrativo del demandante.

HECHO 25: ES CIERTO, de conformidad con el expediente administrativo del demandante.

HECHO 26: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso

HECHO 27 denominado 25: NO ME CONSTA, es una circunstancia ajena al conocimiento de mi presentada, situación que deberá ser demostrada en el proceso

II. PRETENSIONES

Presentamos la oposición a las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que las circunstancias aducidas por la parte actora carecen de sustento factico y legal como se demostrará en el momento procesal oportuno. En consecuencia, manifiesto al despacho lo siguiente:

PRIMERA: Me opongo a la prosperidad de la pretensión de declarar la ineficacia o nulidad de la afiliación del señor **FABIO YEPES MONCADA** toda vez que no se evidencia que existiere por parte de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A, PORVENIR S.A, PROTECCION S.A, SKANDIA S.A**, engaño alguno o acto que evidencie motivo para que se declare el traslado como **ineficaz o nulo**, amén de que la actora efectuó su traslado en cumplimiento del derecho de libertad de escogencia, del que hizo uso la demandante.

SEGUNDA: Me opongo a la prosperidad de la pretensión de declarar la ineficacia o nulidad de la afiliación del señor **FABIO YEPES MONCADA** toda vez que no se evidencia que existiere por parte de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A, PORVENIR S.A, PROTECCION S.A, SKANDIA S.A**, engaño alguno o acto que evidencie motivo para que se declare el traslado como **ineficaz o nulo**, amén de que la actora efectuó su traslado en cumplimiento del derecho de libertad de escogencia, del que hizo uso la demandante.

TERCERA: Me opongo a la prosperidad de la pretensión de declarar la ineficacia o nulidad de la afiliación del señor **FABIO YEPES MONCADA** toda vez que no se evidencia que

existiere por parte de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A, PORVENIR S.A, PROTECCION S.A, SKANDIA S.A**, engaño alguno o acto que evidencie motivo para que se declare el traslado como **ineficaz o nulo**, amén de que la actora efectuó su traslado en cumplimiento del derecho de libertad de escogencia, del que hizo uso la demandante.

CUARTA: Me opongo a la prosperidad de la pretensión de declarar la ineficacia o nulidad de la afiliación del señor **FABIO YEPES MONCADA** toda vez que no se evidencia que existiere por parte de la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS COLFONDOS S.A, PORVENIR S.A, PROTECCION S.A, SKANDIA S.A**, engaño alguno o acto que evidencie motivo para que se declare el traslado como **ineficaz o nulo**, amén de que la actora efectuó su traslado en cumplimiento del derecho de libertad de escogencia, del que hizo uso la demandante.

QUINTA: Habida cuenta que no hay lugar a declarar derecho alguno a favor de la demandante, no habrá lugar a condenar a la Administradora Colombiana de Pensiones – **COLPENSIONES** a pago alguno de costas procesales.

HECHOS, RAZONES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO EN LOS QUE SE BASA LA DEFENSA

Sentencia SL 373 del 2021, mg CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO, la cual moderó el precedente respecto a la posibilidad de materializar los efectos de la ineficacia, esto es, retrotraer las cosas al estado anterior, tratándose de demandantes que ya tienen una situación jurídica consolidada o adquirieron el estatus de pensionados en el régimen de ahorro individual.

Al respecto, el Alto Tribunal de la especialidad laboral reflexionó que, al haberse adquirido la calidad de pensionado, se produce la imposibilidad de retornar al statu quo ante, es decir, tal condición no puede deshacerse o desaparecer del plano jurídico, pues ello conllevaría a “disfuncionalidades que afectaría a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto.”

Para soportar su tesis, la mencionada corporación razonó que no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales. En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del musculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraban las cosas, va en detrimento de los recursos de la Seguridad Social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional.

Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre otras muchas problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del sistema que han confluído en la gestión de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del Sistema General de Pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarrea.

En la Sentencia **C-596 de 1997** la Corte Constitucional estudió una demanda dirigida contra la expresión “al cual se encuentran afiliados” contenida en el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la cual se acusó de desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, colocar en situación desventajosa a las personas que se encontraban en el régimen

de transición y violar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al respecto la Corte expresó:

*“Justamente por cuanto los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como sí sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. **Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho. (...) Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las simples expectativas de derecho.**”* (Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Posteriormente, a través de la providencia **C-789 de 2002**, la Corte Constitucional resolvió la demanda presentada por un ciudadano contra los incisos 4 y 5 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. En la sentencia, la Corte precisó el alcance de derechos adquiridos y meras expectativas en materia pensional, indicando lo siguiente:

“La Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas se ajustaban a la Constitución puesto que, en primer lugar, el derecho a obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición **no es un derecho adquirido sino “apenas una expectativa legítima**, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad”.

En segundo lugar, indicó que ni siquiera puede afirmarse que las normas acusadas frustren tal expectativa ya que sólo “se podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo”.

Por último, precisó que “la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios considerados como mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares”, razón por la cual tal prohibición no aplica en este caso al tratarse de expectativas legítimas y no de derechos adquiridos”.

Adicionalmente, las sentencias **C-1024 de 2004**, y **SU-062 de 2010**, de la **Corte Constitucional** en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría. Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que “el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato”. Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse NO es absoluto y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales.

Sentencia SU 130 de 2013

TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL CUANDO AL AFILIADO LE FALTAREN DIEZ AÑOS O MENOS PARA CUMPLIR EDAD-Prohibición, so pena de perder derecho al régimen de transición

“En el caso de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones, tuvieran treinta y cinco (35) años o más si son mujeres, o cuarenta (40) años o más si son hombres, éstas pueden trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años contados a partir de la selección inicial, salvo que les falte diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, evento en el cual no podrán ya trasladarse. En todo caso, de ser viable dicho traslado o haberse efectuado el mismo al momento de

proferirse la presente providencia, ello no da lugar, bajo ninguna circunstancia, a recuperar el régimen de transición”.

Sentencia C 086 de 2016

En esta providencia la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 167 del CGP en relación a la carga dinámica de la prueba, precisando que esta figura jurídica puede ser aplicada por el juez, luego de examinar las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el Legislador ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba, dentro del fallo señaló la Corte:

“7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio “quien alega debe probar” cede su lugar al principio “quien puede debe probar”. Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, “según las particularidades del caso”, para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, “entre otras circunstancias similares”.

Los eventos mencionados recogen en buena medida las reglas trazadas por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia Corte Constitucional. Sin embargo, el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios – algunos tal vez inimaginables-, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la “longa manus” del juez para restablecerla.

De esta manera, para la Corte es claro que en algunos casos el decreto oficioso de pruebas o la distribución de su carga probatoria dejan de ser una potestad del juez y se erige en un verdadero deber funcional. No obstante, ello debe ser examinado de acuerdo con las particularidades de cada caso, sin invertir la lógica probatoria prevista por el Legislador ni alterar las reglas generales en lo concerniente a la distribución de la carga de la prueba. De hecho, para tal fin también se han diseñado diversos recursos y mecanismos de control al interior de cada proceso, e incluso excepcionalmente podrá hacerse uso de mecanismos extraordinarios como la acción de tutela, lo cual ha sido avalado en numerosas ocasiones por la jurisprudencia constitucional.

Por consiguiente, la carga dinámica de la prueba es una excepción y no una generalidad, cuya aplicación está supeditada al análisis de las particularidades del caso por parte del juez, aspectos que fueron desconocidos en el caso sub lite, en la medida que la Corte Invirtió la carga de la prueba en cabeza del fondo, atendiendo a la simple manifestación del demandante y sin realizar el menor análisis en relación a las circunstancias específicas en que se surtió el traslado de régimen.

Sentencia SL 3752 de 2020

Magistrada ANA MARIA MUÑOZ SEGURA -Coexistencia entre regímenes pensionales y el derecho del afiliado (a) en su escogencia.

(...) De ahí que, inexorablemente, se evidencie la importancia de que las personas, al momento de escoger el régimen, estén debidamente asesoradas. Es así, pues la información

asimétrica referente a la forma en que operan y conceden la prestación de vejez de los dos regímenes, comprometen la escogencia libre y consciente de los afiliados.

Así que es la propia Ley la que sanciona, con severidad el incumplimiento íntegro de los deberes de información que les atañe e incluso, para la controversia suscitada ello era determinante, de un lado porque la simple manifestación genérica de aceptar las condiciones, no era suficiente y de otro, correspondía dar cuenta de que se actuó diligentemente, no solo por la propia imposición que trae consigo la referida norma, sino porque en los términos del artículo 1604 del Código Civil, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplear, en este específico caso ellas no se agotan solo con traer a colación los documentos suscritos, sino la evidencia de que la asesoría brindada era suficiente para la persona y esto no se satisfacía únicamente con llenar los espacios vacíos de un documento, sino con la evidencia real sobre que la información plasmada correspondiera a la realidad y atendiera las pautas para que se adoptará una decisión completamente libre, en las voces del referido artículo 13 de la Ley 100 de 1993 (...)

En el caso en concreto, el señor **FABIO YEPES MONCADA** registra fecha de afiliación al Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado en su momento por el Instituto de Seguros Sociales – ISS en el año 1998.

Puesto de presente lo anterior, se tiene que según lo afirmado en el libelo petitorio que el señor **FABIO YEPES MONCADA** suscribió formulario de afiliación a **LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS S.A.** el cual se hizo efectivo en **DICIEMBRE DE 1998**, de ahí que, la afiliación se realizará de conformidad al artículo 13 de la Ley 100 de 1993 que reza:

“b) La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley.

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”;

Atendiendo a las particularidades del caso concreto, destáquese que al momento en que se expidió la Ley 100 de 1993, el señor **FABIO YEPES MONCADA** tenía la posibilidad de escoger cualquiera de los dos regímenes que fueron creados, resultando que con la suscripción del formulario en la entidad **LA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES y CESANTÍAS COLFONDOS S.A.**, la demandante tomó la decisión de manera libre y espontánea de trasladarse de AFP, entendiendo así, su deseo de acogerse al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

De ahí que, en el *sub lite* es la demandante quien debe acreditar que la información suministrada por la AFP del RAIS, fue equivocada o engañosa, resaltando que en los mismos hechos del libelo gestor se indica que el accionante se trasladó a **AFP COLOFNDOS S.A.**, lo que expresa en principio no pueda pregonarse el error en la información, debido a que la voluntad del señor **FABIO YEPES MONCADA**, ha decidido por más de **VEINTE (20) años** permanecer en dicho régimen, sin que por otro lado, considere que la simple enunciación que el valor de la mesada pensional varía entre los dos regímenes, es motivo suficiente para acceder a las pretensiones del escrito demandador, debido a que, conforme las disposiciones de la Ley 100 de 1993 ambos regímenes pensionales concurren legamente, enfatizando que si el accionante tenía dudas acerca de la información suministrada, debió acudir directamente al **INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS**, para comparar cuál de los dos regímenes era el que más le beneficiaba, infiriendo que su desidia u omisión en aquel momento, en modo

alguno puede considerar enmendar con el presente litigio, fundamentando que en la actualidad la información que se le comunicó fue engañosa.

Por otro lado, ese mismo artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su literal e, indica:

“e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”;

En este contexto, para el **5 DE MAYO DE 2023** momento en el el señor **FABIO YEPES MONCADA**, decidió solicitar ante la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES** el regreso al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, se encontraba imposibilitado legalmente mi representada para autorizar dicho traslado, toda vez que, de cara a la norma vigente, ya citada, el actor ya se encontraba imposibilitado para retornar al Régimen de Prima Media en razón a que ya contaba con impedimento por la edad.

Así como se deduce de igual forma, que, para la entrada en vigencia del Sistema de Seguridad Social, **1 de abril de 1994**, no contaba con las 750 semanas de cotización equivalentes a 15 años de servicio, es decir, no era considerado como beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto, se ha pronunciado la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Pereira, en sentencia del diecinueve (19) de febrero de dos mil diecinueve (2019), Radicación: 66001-31-05-003-2017-00364-01. M.P. Olga Lucía Hoyos Sepúlveda, para precisar lo siguiente:

“(…) ... la intelección que se continuará efectuando por esta Sala Mayoritaria es que si el afiliado es beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993 hay lugar analizar la ineficacia del traslado conforme a la tesis expuesta inicialmente por la CSJ, evento en el que se invierte la carga de la prueba a la AFP, quien debe acreditar que le suministró la información debida para que pudiera adoptar conscientemente la decisión de traslado, específicamente, en lo relacionado con la pérdida del régimen de transición.

Pero, en caso contrario, de no ser beneficiario actual de dicho régimen, debe estudiarse bajo la óptica de la nulidad del acto jurídico del traslado por vicios en el consentimiento, evento en el cual, le corresponde al afiliado acreditar los respectivos hechos de acuerdo con los Principios del Onus Probandi, de conformidad con el artículo 167 del C.G.P., so pena de la improsperidad de sus pretensiones. (...)

De conformidad con el artículo 1741 del Código Civil, la nulidad de los actos jurídicos o de los contratos es absoluta cuando se produce por un objeto o causa ilícita o por falta de las formalidades; mientras que cuando tiene un origen diverso como por ejemplo un vicio del consentimiento, sólo se genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato.

En cuanto a los vicios el consentimiento, según lo establece el artículo 1508 ibídem, lo son el error, la fuerza y el dolo.

El primero –error–, puede serlo de derecho y de hecho, pero aquel no vicia el consentimiento, conforme lo plantea el artículo 1509. (...)

A su vez, el artículo 1750 del Código Civil prevé que para alegar la rescisión en los eventos en que se alegue la ocurrencia de error o dolo, se cuenta con un plazo de cuatro años contados desde el día de la celebración del acto o contrato.

De otro lado el artículo 1743 ibídem dispone que la nulidad relativa se sana por el paso del tiempo o por ratificación de las partes. (...)

Por otro lado, si en gracia de discusión se llegará a considerar que es procedente declarar la nulidad o ineficacia del traslado de régimen pensional, debe tenerse en cuenta que en el sub judice que el señor **FABIO YEPES MONCADA** al suscribir el formulario de afiliación a la **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES COLFONDOS S.A** declaró bajo la gravedad de juramento en cada uno de ellos haber escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad de manera libre, espontánea y sin presiones, por lo que se infiere que el traslado al RAIS se hizo bajo los parámetros establecidos en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993, de ahí que, le concierna al actor demostrar que la información que se le suministró fue equivocada, con el propósito de obtener la declaración de ineficacia del aludido régimen pensional.

En cuanto a la presunta nulidad de la afiliación, las disposiciones jurídicas para resolver la Litis lo son por analogía las prescripciones del Código Civil, que indican verbigracia en el artículo 1741 del C.C., que la nulidad de los actos jurídicos o de los contratos, cuando tiene un origen diverso del objeto o causa ilícita, como un vicio del consentimiento, sólo genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato, evento en el cual, se aplican los artículos 1502, 1508 y 1604 *Ibídem*; resultando perentorio el texto del artículo 1750 C.C., que

a renglón seguido indica que el plazo para pedir la rescisión del contrato durará cuatro (4) años, así, si el traslado del señor **FABIO YEPES MONCADA** tuvo efectividad en **COLFONDOS S.A.** Desde el mes **DICIEMBRE DE 1995**, la acción rescisoria fenecía el mes **DICIEMBRE DE 1999**, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del tiempo, ya que, la presente acción sólo se vino a incoar **VEINTE (20)** años después de la suscripción del formulario a la AFP del RAIS; así:

“Artículo 1741. Nulidad absoluta y relativa: La nulidad producida por un *objeto o causa ilícita*, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a

la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay así misma nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces.

Cualquiera otra especie de vicio produce nulidad relativa, y da derecho a la rescisión del acto o contrato.

Artículo 1750. Plazos para interponer la acción rescisión: *El plazo para pedir la rescisión durara cuatro años.*

Este cuatrienio se contará, en el caso de violencia, desde el día en que ésta hubiere cesado; en el caso de error o de dolo, desde el día de la celebración del acto o contrato.

Cuando la nulidad proviene de una incapacidad legal, se contará el cuatrienio desde el día en que haya cesado esta incapacidad.

A las personas jurídicas que por asimilación a los menores tengan derecho para pedir la declaración de nulidad, se les duplicará el cuatrienio y se contará desde la fecha del contrato.

Todo lo cual se entiende en los casos en que las leyes especiales no hubieren designado otro plazo”. (Subrayado fuera del texto original).

Lo anterior en aras de demostrar que ha quedado saneado con el tiempo las nulidades relativas que hubiesen podido surgir, pues como se evidencia en el escrito de la demanda, se tiene que la parte actora si recibió información para su traslado tal y como lo manifiesta, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del tiempo y la prescripción de la acción rescisoria.

En igual sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia reciente, SL-17595 de 2017 con ponencia del Doctor Fernando Castillo Cadena, aplicable en este caso, independientemente de si el afiliado es beneficiario o no del régimen de transición, ha indicado que el acto jurídico de traslado de régimen es ineficaz, cuando no media la libre escogencia, que sólo la habrá:

“cuando se proporcione la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una

opción que claramente le perjudica” para más adelante agregar que “Aquí y ahora, se recuerda que no es dable argüir que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito”. (Subrayado fuera del texto original).

Aunado a lo anterior, es pertinente traer a colación reciente pronunciamiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Magistrada Ponente Dra. Olga Lucia Hoyos Muñoz, en proceso de radicado Nro. 66001-31-05-003-2018-00133-01, la cual señala:

“(…) No obstante, tal entendimiento de la norma jurídica invocada por la Corte Suprema, no se comparte por la Sala Mayoritaria de esta colegiatura, tal como se ha advertido a partir de las aclaraciones de voto de uno de sus integrantes, en tanto que la acción a incoar en realidad corresponde a la resarcitoria de perjuicios. (…)

... Ahora, la posición ya descrita de ninguna manera deja al garete a los afiliados que se trasladaron de régimen debido a la omisión del deber de información de las AFP (error u omisión), y que ahora, por lo general 20 años después, reclaman ante la administración de justicia, no porque se encuentre inconformes con los beneficios del RAIS..., sino porque el valor de la mesada pensional esperada no es lo suficientemente alto como desean para vivir durante su ancianidad, en contraste con la que recibiría de haber permanecido o escogido el RPM.

Para remediar tal inconformidad el legislador contempló una acción diferente como es el resarcimiento de perjuicios, prescrito en el artículo 10 del Decreto 720 de 1994 – vigente para la época de los hechos –, que establece:

“Responsabilidad de los promotores: cualquier infracción, error u omisión – en especial aquellos que impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados – en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad compromete la responsabilidad de la sociedad administradora respecto de la cual adelante sus labores de promoción o con la cual, con ocasión de su gestión, se hubiere realizado la respectiva vinculación sin perjuicio de la responsabilidad de los promotores frente a la correspondiente sociedad administradora del sistema general de pensiones”. (…)

Puestas de este modo las cosas, si el supuesto de hecho expuesto en las demandas se encuentra dirigido a probar que el promotor de la AFP omitió o erró en la información otorgada para que el trabajador pudiese elegir a cuál régimen pensional quería pertenecer, y esto le ocasionó un perjuicio, por el valor de la mesada que será otorgada en el RAIS, entonces la acción a emprender no es la ineficacia de la afiliación, sino la de resarcimiento de perjuicios, sin que a través de esta se permita la nueva elección de régimen pensional o retorno al anterior, que es la consecuencia de salir avante la

ineficacia, que por el principio de legalidad no puede extenderse a estos supuestos fácticos. (...) (Negrilla fuera de texto)

EXCEPCIONES DE FONDO

Con el fin de enervar las pretensiones de declaración y condena solicitadas en el libelo genitor, me permito proponer las siguientes excepciones, de las cuales solicito sean declaradas:

- **VALIDEZ DE LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD.**

Si bien la parte accionante manifiesta que al momento de realizarse la afiliación al RAIS se le comunicaron diferentes motivos para promover su elección e inducirlo a error, alegando la existencia de un vicio en su consentimiento, el proceso se encuentra huérfano de prueba en la cual se pueda encontrar la certeza de sus dichos, pues no se observa que para el momento de su afiliación hubiese solicitado una proyección de lo que sería su mesada pensional en el RAIS o que incluso se hubiese acercado al otrora administrador del RPMPD, INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para ser asesorada en su decisión.

Adicional a lo anterior, la demandante incluso afirma que su intención al realizar el traslado del RPMPD al RAIS era con el fin de obtener una mejor rentabilidad para el momento en el cual causara su derecho pensional de vejez, trasladándose inclusive entre AFP del sector privado; por lo cual no es aceptable que al realizar los cálculos correspondientes y verificar que recibiría una mayor mesada si perteneciera al RPM pretenda regresar al mismo, cuando se estaría yendo en contravía de la sostenibilidad financiera del mismo, puesto que los aportes no se harían en consideración con el cálculo actuarial necesario para determinar las sumas que se recibirían por concepto pensional, afectando la garantía de los demás cotizantes de recibir una pensión mínima.

- **INVALIDEZ DEL RETORNO AL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA.**

Debe recordarse que el literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 en su versión original, establecía que:

“Los afiliados al sistema general de pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, éstos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial, en la forma que señale el Gobierno Nacional”

Ello quiere decir que al momento de realizarse el traslado por parte de la actora, dicha normatividad solo permitía que sucediera por una sola vez, por lo cual la afiliación al RAIS es completamente válida.

Posteriormente, frente a la solicitud de afiliación realizada por la accionante, la misma se hizo en vigencia del literal e del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, el cual limitó el traslado entre regímenes cuando al afiliado le faltaren menos de 10 años para arribar a la edad pensional, motivo por el cual el mismo nunca surtió efectos.

- **INOPONIBILIDAD DE LA RESPONSABILIDAD DE LA AFP ANTE COLPENSIONES EN CASOS DE INEFICACIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN.**

Entendida la inoponibilidad (mecanismo protector), como la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros, es decir, que la ineficacia o nulidad, resulta inoponible frente a terceros de buena fe como en este caso Colpensiones, a la par que la figura de la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS, aunado a que la seguridad jurídica que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros, en este caso, tiene alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y de la planeación de la reserva pensional.

De la misma manera la Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que “valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados”, racionio, que a su vez se deriva del principio de la relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan en aquel.

Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, algo que es ineficaz entre las partes (como en este caso la afiliación al RAIS), si se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (en este caso Colpensiones). Así se ha dicho que: “Cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio valido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como valido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes”. Es decir, que la inoponibilidad en este caso frente a un negocio jurídico ineficaz, permite que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe, o en otras palabras para el caso concreto, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones, para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultar oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

- **DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES –ART. 48 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ADICIONADO POR EL ARTÍCULO 1 DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005.**

En desarrollo de los fines esenciales del Estado Colombiano, las instituciones que lo conforman deben propender hacia la salvaguarda de los principios y valores constitucionales conforme a lo dispuesto en la Carta Política, la Ley y los Convenios Internacionales suscritos por aquel.

El artículo 48 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, señaló:

“El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del sistema pensional, respetara los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”. (Cursiva, negrilla y subrayado fuera del texto original).

En igual sentido el artículo 334 de la Constitución Política señaló que: “ La sostenibilidad fiscal debe orientar a las ramas y órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica”, en ese orden de ideas, es necesario que, dando prevalencia al interés general sobre el particular, se tomen las medidas pertinentes en búsqueda de la protección de los recursos que soportan al sistema pensional, conforme a los principios que rigen la Constitución Política, en la medida que el derecho a la seguridad social se encuentra atado al principio de sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera del Estado.

En consecuencia, la declaración injustificada de ineficacia del traslado de un afiliado del RPM al RAIS afecta la sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones, y pone en peligro el derecho fundamental a la seguridad social de los demás afiliados.

Así lo reconoció la Corte Constitucional en la sentencia T-489 de 2010 donde señaló:

“existe plena libertad para que los afiliados se inscriban en cualquiera de los dos regímenes y para trasladarse del uno al otro. La única restricción acatada por la jurisprudencia constitucional, que se desprende del artículo 48 de la Constitución Nacional en la cual está sólidamente afincada obliga al Estado a “garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional”, en virtud de esta disposición se explica la presencia de los incisos 4 y 5 del artículo 36 cuando establecen como excepción que: “lo dispuesto en el presente artículo para las personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual con solidaridad, caso en el cual se sujetaran a todas las condiciones previstas para dicho régimen. Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación

definida. Restricción que, como se vio, persigue evitar el detrimento económico a que, en particular, se ve sujeto el régimen de prima media, en este contexto económico financiero la sala rescata y apoya las medidas de orden legal avaladas por la Corte Constitucional para garantizar la solidez financiera del sistema pensional como son: El cumplimiento en un 75% de las cotizaciones, hasta completar los 15 años. La posibilidad de retornar al régimen de prima media con prestación definida pero con la obligación de llevar a él la totalidad del ahorro realizado en el régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) sí que este ahorro sea inferior al que se hubiera alcanzado al permanecer en el de prima media con prestación definida. La prohibición de cambiarse de régimen para personas a quienes les falten diez (10) años o menos para alcanzar la edad de pensión de vejez. La obligación de permanecer en el régimen que se escoja durante cinco (5) años y no tres (3), como lo autorizaba el artículo 13 de la ley 100 antes de cambiarse de régimen, por una sola vez, (Ley 797- 03 artículo 2).

- **NO PROCEDE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA Y/O NULIDAD DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL, EN LOS CASOS EN QUE LA PARTE DEMANDANTE SE TRATE DE UNA PERSONA QUE YA SE ENCUENTRE PENSIONADA EN EL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES.**

Teniendo pleno conocimiento que la declaratoria de la ineficacia entre sus efectos se encuentra retrotraer las cosas al estado anterior, hay circunstancias como que el demandante tenga una situación jurídica ya consolidada o que ya adquirieron el estatus de pensionados, situaciones que generarían un detrimento en el sistema pensional.

A este respecto, el Alto Tribunal de la especialidad laboral reflexiono que al haberse adquirido la calidad de pensionado, se produce la imposibilidad de retornar al estatu quo ante, es decir, tal condición no puede deshacerse o desaparecerse del plano jurídico, pues ello conllevaría a “disfuncionalidades que afectarían a múltiples personas, entidades, actos, relaciones jurídicas, y por tanto derechos, obligaciones e intereses de terceros y del sistema en su conjunto”.

Para soportar la anterior tesis, la Corporación razono que no es posible revertir ciertos efectos económicos como el deterioro que sufre el capital que ya ha sido objeto de pago a través de mecanismos de financiación como los bonos pensionales y las cuotas partes de entidades contribuyentes, como consecuencia ineludible del pago de mesadas pensionales. En efecto, es irreparable la pérdida de integridad del musculo financiero con que se respalda el pago de la prestación, por lo que forzar a través de una ficción jurídica la vuelta al estado anterior en que se encontraban las cosas, ve en detrimento de los recursos de la seguridad social, bien sea que provengan de la Nación y/o demás entidades que deben contribuir al financiamiento del pasivo pensional.

Sumado a lo anterior, se torna inviable la realización de los efectos de la ineficacia, por cuanto no es posible cesar los efectos jurídicos de las operaciones, contratos y actos que involucran a terceros como aseguradoras, entidades oficiales e inversiones, que según la modalidad pensional en que se encuentre el actual pensionado, hayan concurrido en la administración y gestión del riesgo financiero, entre muchas otras problemáticas de orden financiero, que ocasionarían un déficit económico entre los actores del sistema que han confluído en la gestiones de los recursos a través de relaciones jurídicas válidamente suscitadas en el mundo jurídico del sistema general de pensiones, en cumplimiento de obligaciones y deberes contractuales que ya se encuentran consumados y perfeccionados con las consecuencias de orden legal y financiero que ello acarea. (Sentencia SL 373 – 2021 Radicación Nro. 84475 del 10 de febrero de 2021) Magistrada Ponente Clara Cecilia Dueñas Quevedo).

- **ACEPTACIÓN IMPLÍCITA DE LA VOLUNTAD DEL AFILIADO**

Solicita el actor la declaración de la nulidad de la afiliación que hizo la AFP PORVENIR S.A, sin embargo, es menester precisar que conforme la línea jurisprudencial esbozada en el acápite anterior, proferida por la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, el señor **FABIO YEPES MONCADA** realizó aportes desde el año 1995 hasta la actualidad, permaneciendo por más de 20 años en el RAIS, es decir, por las particularidades del sub lite, se entiende que debe ser el actor quien pruebe los fundamentos de facto del libelo gestor,

toda vez que es una manifestación implícita de voluntad del afiliado, que en casos como el presente, donde se discute la materialización del acto jurídico de la afiliación o traslado, es relevante tener en cuenta los aportes al sistema, no como un requisito ad substantiam actus de la afiliación, sino como una señal nítida de la voluntad del trabajador cuando existen dudas razonables sobre su genuino deseo de cambiarse de régimen.

Situación que se reafirma al suscribir voluntariamente el formulario de afiliación a la **AFP COLFONODS SA** en diciembre de 1995, declaró bajo la gravedad de juramento haber escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad de manera libre, espontánea y sin presiones, por lo que se infiere que el traslado al RAIS se hizo bajo los parámetros establecidos en los artículos 13 literal b) y 271 de la Ley 100 de 1993.

- **SANEAMIENTO DE UNA PRESUNTA NULIDAD:**

Toda vez que las pretensiones del señor **FABIO YEPES MONCADA**, están encaminadas a que se declare la nulidad del acto jurídico por medio del cual se trasladó del otrora INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES – ISS-, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en la entidad **COLFONDOS SA.**, debe tenerse en cuenta que las disposiciones jurídicas para resolver la Litis lo son por analogía las prescripciones del Código Civil, que indican verbigracia en el artículo 1741 del C.C., que la nulidad de los actos jurídicos o de los contratos, cuando tiene un origen diverso del objeto o causa ilícita, como un vicio del consentimiento, sólo genera nulidad relativa, que da lugar a la rescisión del acto o contrato, evento en el cual, se aplican los artículos 1502, 1508 y 1604 Ibídem; resultando perentorio el texto del artículo 1750 C.C., que a renglón seguido indica que el plazo para pedir la rescisión del contrato durará cuatro años, así, si el traslado del señor **FABIO YEPES MONCADA** al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tuvo efectividad desde el 1995, la acción rescisoria fenecía en el año 1999, evidenciándose que si existió algún tipo de error en el consentimiento el mismo ha quedado saneado con el paso del tiempo, ya que, la presente acción sólo se vino a incoar cerca de veinte (20) años después de la suscripción del formulario a la AFP del RAIS.

- **PRESCRIPCIÓN**

Sin que implique reconocimiento de derecho alguno, se formula la excepción de prescripción, la cual está contenida en dos sub-acápites, así, de manera principal de conformidad con lo expuesto en los artículos 151 C.P.T.S.S. y 488 C.S.T., se tiene que lo peticionado por la parte actora se encuentra cobijada por el fenómeno prescriptivo, como quiera que a la fecha de presentación de la demanda ya se encontraban vencidos los tres años para reclamar las pretensiones del libelo.

Por otro lado, de manera subsidiaria en armonía con el artículo 1750 C.C., el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, tuvo efectividad desde el año 1995, la acción rescisoria fenecía en el año 1999, evidenciándose que cualquier reclamación en concreto se encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción.

- **BUENA FE:**

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, en todas sus actuaciones tiene que someterse al imperio de la Constitución Política y de la Ley, conforme lo prescriben entre otros los artículos 121, 122 y 128 de la Carta Política, siendo esto lo que ha acatado hasta el momento. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: "Como principio general del derecho, (la buena fe) ha sido reconocido por la jurisprudencia colombiana especialmente desde 1935, citándose la jurisprudencia y doctrina francesa y sobre todo el artículo 1603 del Código Civil Colombiano: "Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella". Norma que tiene su correspondencia en numerosos artículos del Código Civil y que en la década del treinta también tendrá en Colombia importante tratamiento doctrinal: "De ahí que se hable de la buena fe como de un criterio primordial en la interpretación de las convenciones, gracias al cual el juez puede sacar triunfante la equidad sobre los rigores del formalismo".

"El principio de la buena fe es también principio del derecho laboral, ha sido incluido en el Código Sustantivo del Trabajo, artículo 55 y aparece en la jurisprudencia laboral desde la época del Tribunal Supremo del Trabajo: "El principio de la buena fe, que no es nuevo sino que data de las mejores tradiciones romanas, debe presidir la ejecución de los contratos, incluido el de trabajo". Sentencia ésta proferida el 9 de febrero de 1949 y que llega hasta analizar no solo la buena fe sino la mala fe, en los siguientes términos: "La mala fe –ha dicho la Corte Suprema de Justicia- debe ser la deducción acertada hecha sobre la plena comprobación de hechos precisos de naturaleza incompatible con la bona fide, como lo sería, en tratándose de la buena fe contractual, la demostración evidente de una visible ventaja pecuniaria en una negociación celebrada con un incapaz, que mostrara un aprovechamiento inhonesto del estado de inferioridad en que ocurrió una de las partes a su celebración, es decir, la prueba de que se abusó de un estado de debilidad para obtener un indebido e injusto provecho, apreciable en el desequilibrio de los valores.

Sin olvidar tampoco que la calificación de la fe jurídica, el rigor con que se exige o es exigible buena fe en los negocios de hecho, conformada probatoriamente y adoptada en las situaciones de cada caso".

Según lo anterior, la buena fe en la labor misional de LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, surge precisamente de la estricta aplicación de la Constitución, la ley y el precedente jurisprudencial que permite conceder o negar prestaciones ajustadas a derecho, por lo cual, existiendo la presunción de legalidad del acto que garantiza seguridad jurídica en la decisión prestacional, tal circunstancia permite revestir además bajo la égida de la buena fe el reconocimiento o negación pensional por lo que es de carga exclusiva del demandante controvertir tanto la presunción legal del acto como la buena fe en la decisión. Por lo que solicito respetuosamente a su señoría que se abstenga de condenar a mi representada, toda vez que como se ha demostrado siempre ha actuado conforme a los mandatos legales y constitucionales.

- **GENÉRICA**

En virtud del alcance del principio de búsqueda de la verdad formal frente a los poderes oficiosos del juez, si éste encuentra probados los hechos que lo constituyen deberá reconocerlos oficiosamente. Por lo anterior, solicito a la señora juez declarar oficiosamente las excepciones que aparezcan probadas de conformidad con el ordenamiento procesal.

- **DECLARATORIA DE OTRAS EXCEPCIONES**

Pido al Despacho que, si halla probados hechos que constituyen una excepción, los reconozca de manera oficiosa en la Sentencia, así como también si encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas o algunas pretensiones de la demanda, se abstenga de examinar las restantes de acuerdo con lo estatuido en el artículo 306 del C. P. C. por reenvío que se impone en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Desde ahora me reservo la facultad de ampliar y proponer nuevas excepciones en la audiencia especial que se fije con el fin de resolver las ya propuestas, así como para solicitar pruebas en respaldo de estas.

PRUEBAS

Solicito se tengan como tales, todos los documentos que se aportan con la presente contestación de la demanda, los cuales son los únicos con los que cuenta mi representada.

1. DOCUMENTALES.

- Expediente Administrativo del señor **FABIO YEPES MONCADA** en el siguiente link: <https://drive.google.com/drive/folders/1SNfE4LWgKblbrBcgrZ2F2nNRmPL-tBxg?usp=sharing>

Solicitud de interrogatorio de parte

- De manera muy respetuosa señora Juez, solicito se decrete el Interrogatorio de parte del señor **FABIO YEPES MONCADA** con la facultad y potestad de RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS, para que absuelva el interrogatorio en la

oportunidad que fije el Despacho; la finalidad de la prueba es verificar los hechos y afirmaciones realizadas por la demandante en el escrito gestor.

Prueba de oficio

- Solicito al despacho se ordene a la **AFP PORVENIR S.A.** a proyectar el valor de las mesadas pensionales a pagar a la demandante, si este estuviera afiliado al Régimen de Prima Media, teniendo en cuenta su expectativa de vida y la de sus beneficiarios, toda vez que es la AFP quien custodia la información respecto al IBC, conoce los beneficiarios del señor **FABIO YEPES MONCADA** y en consecuencia será esta una prueba necesaria ante una eventual condena a **COLPENSIONES**, para proveer y/o proyectar los recursos necesarios para el pago de la prestación si retorna al RPMPD.
- Solicito al despacho se ordene a la **AFP PRORVENIR S.A.** a certificar si el señor **FABIO YEPES MONCADA** ostenta la calidad de pensionada en el RAIS o si la misma ya cumplió los requisitos que le otorgan el estatus de pensionado pese a no encontrarse percibiendo aún la prestación.
- Solicito al despacho se ordene a la **AFP PORVENIR S.A.** a certificar cuales fueron todas las operaciones y contratos financieros que se celebraron y ejecutaron con terceros para consolidar el soporte financiero del pensionado, y se alleguen los respectivos soportes que lo acreditan.
- Solicito al despacho se ordene a la **AFP PORVENIR S.A.** a certificar y allegar los soportes atinentes al trámite de emisión y expedición de bonos pensionales en el caso del señor **FABIO YEPES MONCADA**.

OTRAS PRUEBAS OFICIOSAS

Las que la señora Juez considere decretar para obtener la certeza jurídica suficiente al momento de proferir Sentencia, para lo cual ruego se de aplicación al inciso final del artículo 170 del C.G.P, que reza: *“Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes”*

ANEXOS

- Escritura pública No. 3365 del año 2019.
- Certificado de existencia y representación legal de sociedad **MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S**
- Sustitución de poder
- Lo enunciado en el acápite de pruebas.

NOTIFICACIONES

El suscrito recibirá notificaciones en la Secretaria de su despacho y/o a los correos electrónicos, mmaabogado04@[gmail.com](mailto:mmaabogado04@gmail.com) - dquintero8@[gmail.com](mailto:dquintero8@gmail.com), Celular 3122794575.

Sírvase, señor(a) Juez, tener por contestada la demanda.



DANIEL QUINTERO BLANDON
CC 1.088.313.478 de Pereira-Risaralda
TP 305.744 del C S de la J.

Doctora
MARTHA INES RUIZ GIRALDO
JUEZ TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO
E. S. D.

REFERENCIA : **PROCESO ORDINARIO LABORAL**
DEMANDANTE : **FABIO YEPES MONCADA**
DEMANDADO : **COLPENSIONES**
RADICACIÓN : **17001310500320240002400**
ASUNTO: **PODER DE SUSTITUCIÓN**

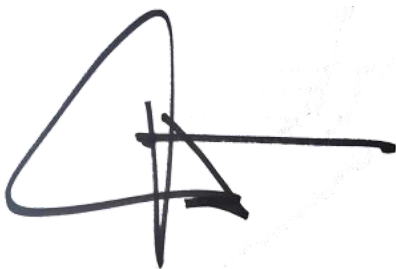
SANTIAGO MUÑOZ MEDINA, mayor de edad, vecino y residente en Cali-Valle, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.16.915.453 expedida en Cali, obrando en mi condición de representante legal suplente de la sociedad **MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S.** sociedad legalmente constituida mediante documento privado del 25 de abril de 2.015, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali bajo el registro No 6.064 del Libro IX, identificada con NIT. No. 900.847.273-4, según consta en el certificado de Existencia y Representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Cali, en ejercicio del **PODER GENERAL** otorgado mediante escritura pública No. 3365 de 2019, por la **Administradora Colombiana de Pensiones "COLPENSIONES"**, identificada con NIT 900.336.004-7, parte demandada dentro del proceso de la referencia, con todo respeto, muy comedidamente manifiesto por medio del presente escrito que **SUSTITUYÓ** el Poder a mí conferido con todas sus facultades inherentes a él, a favor de **DANIEL QUINTERO BLANDON**, mayor de edad, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1088313478, abogada inscrita con Tarjeta Profesional No. 305744 del C.S.J.

Fundamento la anterior solicitud con base en lo dispuesto en el Artículo 77 del C.G.P

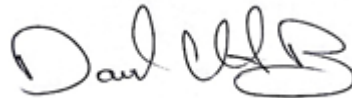
Sírvase Señor Juez, aceptar la sustitución y reconocer personería.

Atentamente,

Acepto,



SANTIAGO MUÑOZ MEDINA
C.C.No.16.915.453 de Cali
T.P.No.150.960 C.S.J.



DANIEL QUINTERO BLANDON
C.C. No. 1.088.313.478
T.P. No. 305.3744 del C.S.J.

Recibiré notificaciones al correo electrónico: mmaabogado04@gmail.com - dquintero8@gmail.com

por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se protocoliza a través de la presente escritura para que haga parte de la misma, sociedad legalmente constituida mediante Acuerdo No 2 del 01 de Octubre de 2008, manifiesto que en aplicación de los artículos 440 y 832 del Código de Comercio y la Circular básica Jurídica Capítulo III Título I Parte 1, confiere poder general, amplio y suficiente a la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S. identificada con NIT 900.847.273-4, legalmente constituida mediante documento privado del 25 de abril de 2015, inscrita el 04 de Mayo de 2015 con el No. 8084 del libro IX, según consta en la Certificado de existencia y Representación legal Cámara de Comercio de Cali, documento que se protocoliza con el presente instrumento público, para que en nombre y representación de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES represente a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES en los siguientes actos: —

Colpensiones NIT: 900.336.004-7, celebre y ejecute los siguientes actos: —

CLÁUSULA PRIMERA. — Obrando en la condición indicada y con el fin de garantizar la adecuada representación judicial y extrajudicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — Colpensiones EICE, otorgo por el presente instrumento público PODER GENERAL a partir de la suscripción de la presente escritura a la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S con NIT 900.847.273-4, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial, tendiente a la adecuada defensa de los intereses de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — Colpensiones EICE ante la Rama Judicial y el Ministerio Público, realizando todos los trámites, actos y demás gestiones requeridas en los procesos o procedimientos en los cuales la administradora intervenga como parte PASIVA, y que se adelanten en cualquier lugar del territorio nacional, facultad esta que se ejercerá en todas las etapas procesales y diligencias que se requieran atender ante las mencionadas autoridades, incluidas las audiencias de conciliación judicial y extrajudicial. —

El poder continuará vigente en caso de mi ausencia temporal o definitiva como Representante Legal Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — Colpensiones EICE, con NIT. 900.336.004-7, de conformidad con el inciso 6 del artículo 76 del Código General del Proceso, el cual establece que "tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió".

PM
ACON LEON

República de Colombia
Nº 3365

como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien correspondió.

CLÁUSULA SEGUNDA. - El representante legal de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S con NIT 900.847.273-4, queda expresamente autorizado, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, para sustituir el poder conferido dentro de los parámetros establecidos en el artículo 77 del Código General del Proceso, teniendo con ello facultad el apoderado sustituto para ejercer representación judicial y extrajudicial, de tal modo que en ningún caso la Entidad poderdante se quede sin representación judicial y extrajudicial, y en general para que asuma la representación judicial y extrajudicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE.

La representación que se ejerza en las conciliaciones solo podrá adelantarse con sujeción a las directrices del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE.

CLÁUSULA TERCERA. - Ni el representante legal de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S con NIT 900.847.273-4, ni los abogados que actúen en su nombre podrán recibir sumas de dinero en efectivo o en consignaciones por ningún concepto.

Queda expresamente prohibida la disposición de los derechos litigiosos de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE por parte del Representante legal y de los abogados sustitutos que actúen en nombre de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S con NIT 900.847.273-4, sin la autorización previa, escrita y expresa del representante legal principal o suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE y/o del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de Colpensiones.

CLÁUSULA CUARTA. - Al Representante legal y a los abogados sustitutos que actúen en nombre de la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S con NIT 900.847.273-4, les queda expresamente prohibido el recibo o retiro de las ordenes de pago de depósitos judiciales que se encuentren a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICE.

HASTA AQUÍ LA MINUTA ENVIADA Y ESCRITA.

26/06/2019 01:09:2019

SCC41767025

ADVERTENCIA NOTARIAL

El notario responde de la regularidad formal del instrumento que autoriza, pero no de la veracidad de las declaraciones de los interesados, tampoco responde de la capacidad o aptitud legal de éstos para celebrar el acto o contrato respectivo. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9º del Decreto Ley 960 de 1970.

BASES DE DATOS

De acuerdo a lo previsto en la Ley 1581 de 2012 Régimen General de Protección de Datos Personales y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013 se informa a los comparecientes que dentro del protocolo de seguridad adoptado por esta Notaría se ha implementado la toma de huellas e imagen digital de los otorgantes a través del sistema biométrico que se recoge por parte de la Notaría al momento del otorgamiento del presente instrumento previa manifestación expresa de la voluntad de aceptación por parte de los intervinientes, conociendo que dicho sistema de control implementado por la Notaría tiene por objeto prevenir posibles suplantaciones, salvaguardar los instrumentos y la eficacia de los negocios jurídicos celebrados.

El Notario advirtió a los comparecientes:

- 1) Que las declaraciones emitidas por ellos deben obedecer a la verdad.
- 2) Que son responsables penal y civilmente en el evento en que se utilice este instrumento con fines fraudulentos o ilegales.
- 3) Que es obligación de los comparecientes leer y verificar cuidadosamente el contenido del presente instrumento; los nombres completos, los documentos de identificación, los números de la matrícula inmobiliaria, cédula catastral, linderos y demás datos consignados en este instrumento.

Como consecuencia de esta advertencia el suscrito Notario deja constancia que los comparecientes DECLARAN QUE TODAS LAS INFORMACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO SON CORRECTAS Y Tienen CONSCIENCIA, ASIMEN TODA LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVE DE CUALQUIER INEXACTITUD EN LAS MISMAS. El Notario, por lo anterior.

26/06/2019 01:09:2019

Cámara de Comercio de Cali
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha expedición: 27 de Agosto de 2019 12:15:25 PM

Cámara de Comercio de Cali
 Por Documento privado del 25 de Abril de 2015 de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 04 de Mayo de 2015 con el No. 6064 del Libro IX, se constituyó MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S.

CONSTITUCIÓN

TERMINO DE DURACIÓN

VIGENCIA: INDEFINIDO

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL PRINCIPAL LA ASESORIA LEGAL INTEGRAL A PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS, PÚBLICAS O PRIVADAS, EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DEL DERECHO. DE IGUAL FORMA, LA SOCIEDAD PRESTARÁ, A TRAVÉS DE SUS PROFESIONALES VINCULADOS, LOS SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. LA SOCIEDAD PODRÁ PARTICIPAR EN TODA CLASE DE CONVOCATORIAS PARA CELEBRAR ACTOS O CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, O PARA TERCEROS TODA CLASE DE BIENES O LA SOCIEDAD PODRÁ ADMINISTRAR PARA SI MISMA O PARA TERCEROS CUALQUIER TIPO DE NEGOCIOS QUE LE PERMITAN REALIZAR CUALQUIER ACTIVIDAD COMERCIAL O CIVIL LICITA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO	Valor:	\$300.000.000
No. de acciones:	30.000	
Valor nominal:	\$10.000	
CAPITAL SUSCRITO	Valor:	\$270.000.000
No. de acciones:	27.000	
Valor nominal:	\$10.000	

Cámara de Comercio de Cali
 CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha expedición: 27 de Agosto de 2019 12:15:25 PM

Cámara de Comercio de Cali
 Recibo No. 7329643, Valor: \$5.800
 CODIGO DE VERIFICACIÓN: 08198W2N76
 Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co el código de verificación que aparece en la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

MATRÍCULA

UBICACIÓN

La persona jurídica MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La persona jurídica MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S. SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

República de Colombia
Nº 3365

informa que toda corrección o aclaración posterior a la autorización de este instrumento, requiere el otorgamiento de una nueva escritura pública con el lleno de todas las formalidades legales, la cual generará costos adicionales que deben ser asumidos por los otorgantes conforme lo disponen los artículos 102, 103 y 104 del Decreto 960 de 1970.

OTORGAMIENTO

Conforme al artículo 35 del Decreto 960 de 1970, el presente instrumento es leído por los comparecientes quienes lo aprueban por encontrarlo conforme y en señal de asentimiento más adelante lo firman con ella suscribiendo Notario. Los comparecientes declaran que son responsables del contenido y de la vigencia de los documentos presentados y protocolizados para la celebración de este acto jurídico.

AUTORIZACIÓN

Conforme al artículo 40 del Decreto 960 de 1970, la (a) Notario(a) da fe de que las manifestaciones consignadas en este instrumento público fueron suscritas por los comparecientes según la Ley y que dan cumplimiento a todos los requisitos legales, que se protocolizaron comprobantes presentados por ellos y en consecuencia autoriza con su firma la presente escritura pública.

Esta escritura se extendió en las hojas de papel notarial de seguridad identificadas SC0216090451, SC0016090452, SC0816090453.

Derechos Notariales:	\$ 59.400
Retención en la Fuente:	\$ - 0
I.V.A.	\$ 24.499
Recaudos para la Superintendencia:	\$ 6.200
Recaudos Fondo Esp	\$ 6.200

Resolución 0691 del 24 de enero de 2019, modificada por la Resolución 1002 del 31 de enero de 2019 de la Superintendencia de Notariado y Registro.

26/06/2019 01:08/2019

PODERDANTE

JAVIER EDUARDO GUZMÁN SILVA
Actuando como representante legal Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - Colpensiones EICF, con NIT. 900.336.004-7

C.C. No. 79.333.752
Teléfono o Celular: 2170100 ext. 2458
E-MAIL: poderesjudiciales@colpensiones.gov.co
Actividad Económica: Administradora de Pensiones
Dirección: Carrera 10 No. 72 - 33, Torre B, Piso 10 Ciudad: Bogotá D.C.
FIRMA FUERA DEL DEPACHO ARTICULO 2.6.1.2.1.5 DECRETO 1089 DE 2015

ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
NOTARIA NOVENA (9ª) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ

Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha expedición: 27 de Agosto de 2019 12:15:25 PM

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 1 del 15 de febrero de 2018, de la Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de febrero de 2018 No. 2488 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	MAYALIA LOPEZ REYES	C.C.1107047805
PRINCIPAL	SANTIAGO MUÑOZ MEDINA	C.C.16915453
SUPLENTE		

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en estado suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal código CIIU: 6810
 Actividad secundaria código CIIU: 6820
 Otras actividades código CIIU: 8291

CERTIFICA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuren otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para el conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los registros de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la

Cámara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 Fecha expedición: 27 de Agosto de 2019 12:15:25 PM No. 3365

REPRESENTACIÓN LEGAL

ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE, QUIEN SE ENCARGARÁ DE REEMPLAZAR AL GERENTE EN SUS FALTAS TEMPORALES, ABSOLUTAS O ACCIDENTALES.

GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE LA SOCIEDAD TENDRÁ UN GERENTE QUE SERÁ ADemás EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES DEL GERENTE: EL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE, QUIEN PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIACIONES QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA, EL FUNCIONAMIENTO Y EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD. SE ENTENDERÁ INVERTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD COMO:

1) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD FRENTE A LOS ACCIONISTAS, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA FUENTE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O JURISDICCIONALES, DENTRO DE ESTADOS O POR FUERA DE ELLOS;

2) EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES PREVISTOS EN EL OBJETO SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS;

3) RECONOCER LOS DERECHOS DE LOS SOCIOS O PRIVADOS QUE DEBAN OTORGARSE EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES O EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD;

4) PRESENTAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EL INFORME DE GESTIÓN, EL BALANCE GENERAL DE EJERCICIO, EL DETALLE DEL ESTADO DE RESULTADOS Y UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS;

5) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUTO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO SEA COMPETENCIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS;

6) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE O NECESARIO, Y HACER LAS CONVOCATORIAS ORDENADAS POR LA LEY O DE LA MANERA COMO SE PREVE EN ESTOS ESTATUTOS;

7) CUMPLIR LAS ÓRDENES E INSTRUCCIONES QUE LE IMPARTA LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS;

8) CUMPLIR Y HACER CUMPLIR TODAS LAS EXIGENCIAS QUE LA LEY LE IMPONE PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA SOCIAL.

PARAGRAFO. PRIMERO. SUPLENTE DEL GERENTE. EL SUPLENTE DEL GERENTE TENDRÁ LAS MISMAS FACULTADES DEL GERENTE.

Certificado Generado con el Pin No: 918979624603523

Generado el 28 de agosto de 2019 a las 11:26:19

**ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN.**

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

CERTIFICA

NACION SOCIAL: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIVIA

NATURALIZA JURÍDICA: Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo. Entidad sometida al control y supervisión por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Acuerdo No. 2 del 01 de octubre de 2009. Se crea bajo la denominación "Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensivia" una entidad pública que tendrá personalidad jurídica propia en la ciudad de Bogotá, D.C. La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensivia, se crea como una Empresa Industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de la Protección Social, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.

A la fecha No. 9 del 22 de diciembre de 2011, La Administradora Colombiana de Pensiones de Colpensivia, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo, con la cual se otorgó el artículo 46 de la Constitución Política de Colombia.

A la fecha No. 2012092075 del 28 de septiembre de 2012, la Superintendencia Financiera de Colombia no encuentra oposición para que Colpensivia ejecute operaciones como Administradora del Régimen de Prima Media con prestación definida.

A la fecha No. 2011 del 28 de septiembre de 2012, Artículo 1. Inicio de operaciones. A partir de la fecha de publicación del presente decreto, la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensivia inicia operaciones como administradora del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Asimismo, continuará ejerciendo funciones de administración y gestión de los recursos financieros de la Caja de Compensación Afiliados y Pensionados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por el Instituto de Seguros Sociales (ISS), operando su condición en la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensivia, así como los derechos y obligaciones que tiene el mismo régimen. Los afiliados del Régimen de Prima Media con Prestación Definida administrado por la Caja de Seguro Social de Comunicaciones, afiliados por Administración Colombiana de Pensiones - Colpensivia, así como los afiliados a la Unidad de Gestión Patronal y Regimen de Seguridad General de Pensiones - Colpensivia, así como los afiliados a la selección o traslado de la Caja de Providencia Social de Comunicaciones - Caprecom, causadas antes de la entrada en vigencia al día de la expedición del presente Decreto, serán reconocidas y pagadas por esta entidad, hasta tanto la Unidad de Gestión Patronal y Regimen de Seguridad General de Pensiones Social - UGSP y Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional (FOFOPEN) asuman dichas competencias.

AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO: Decreto 2011 del 28 de septiembre de 2012

REPRESENTACIÓN LEGAL: La administración de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensivia está a cargo del Presidente quien será su representante legal, las ausencias temporales o debidas por licencia, enfermedad o cualquier otro motivo, serán suplidas por el Vicepresidente o el Gerente General, quienes deberán ser designados por el Presidente en un documento firmado por él, dentro de los diez días siguientes a la salida de la entidad, siempre que cumplan con los requisitos del cargo. (Acuerdo 145 del 10 de Julio de 2011).

Calle 1 No. 1-39, Bogotá D.C. - 546201
www.administradacolombianade pensiones.gov.co

Página 1 de 3

REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS
CÓDIGO REGISTRO: 151969201

IMPRESO EN COLOMBIA

1903365

REC0CVT12UQIM08

SCCA17676030

[illegible]

NOTARIA 9 DEL CIRCULO DE BOGOTA
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
Notario

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ES PRIMERA (1ª) COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA
NUMERO 3.365 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE
2.019, TOMADA DE SU ORIGINAL QUE SE EXPIDE EN
NUEVE (09) HOJAS DEBIDAMENTE RUBRICADAS EN SUS
MARGENES, CONFORME AL ARTICULO 79 DEL DECRETO
960 DE 1970.

CONDESTINO A: LOS INTERESADOS.
SE EXPIDE EN BOGOTÁ D.C., a los 02 de Septiembre de
2.019.

ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
NOTARIA NOVENA (9) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ
NOTA: CUALQUIERA QUE SE UTILICE EN SU FAVOR O EN CONTRA DE LA NOTARÍA, SE CONSIDERARÁ QUE SE UTILIZA EN SU FAVOR O EN CONTRA DE LA NOTARÍA FINAL.

NOTARIA 9 DEL CIRCULO DE BOGOTA
ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
Notario

CERTIFICADO NUMERO 304-2019
COMO NOTARIA NOVENA (9) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICÓ:

Que por medio de la escritura pública número TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (3.365) de fecha DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019) otorgada en esta Notaría, compareció el(los) señor(a) JAVIER EDUARDO GUZMAN SILVA, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 79.333.752 de Bogotá, en su condición de Representante Legal Suplente de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE, confirió PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, a la sociedad MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S., para que en su nombre y representación, celebre y ejecute las facultades y atribuciones allí consignadas.

Además CERTIFICO que a la fecha el PODER anterior se presume vigente, por cuanto en su original o escritura matriz NO aparece nota alguna que indique haber sido reformado o revocado parcial o totalmente.

Esta certificación de vigencia de poder NO sustituye la presentación física de la escritura pública que contiene el poder

Este certificado se expide con destino al INTERESADO
Bogotá D.C., Dos (02) de Septiembre de dos mil diecinueve (2019)
Elaborado por: *[Firma]*

ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
NOTARIA NOVENA (9) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.
NOTA: CUALQUIERA QUE SE UTILICE EN SU FAVOR O EN CONTRA DE LA NOTARÍA, SE CONSIDERARÁ QUE SE UTILIZA EN SU FAVOR O EN CONTRA DE LA NOTARÍA FINAL.



ELSA VILLALOBOS SARMIENTO
Notaria

CERTIFICADO NÚMERO 0511-2023

COMO NOTARIA NOVENA (9) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

CERTIFICO:

Que por medio de la escritura pública número **TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (3.365)** de fecha **DOS (02) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2.019)** otorgada en esta Notaría, compareció el(la) señor(a) **JAVIER EDUARDO GUZMAN SILVA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.333.752** de Bogotá, en su condición de Representante Legal Suplente de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – Colpensiones EICE, NIT 900.336.004-7** confirió **PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE**, a la sociedad **MUÑOZ MEDINA ABOGADOS S.A.S. NIT 900.847.273-4**, para que en su nombre y representación, celebre y ejecute las facultades y atribuciones allí consignadas.

Además **CERTIFICO** que a la fecha el **PODER** anterior se presume vigente, por cuanto en su original o escritura matriz **NO** aparece nota alguna que indique haber sido reformado o revocado parcial o totalmente.

Esta certificación de vigencia de poder **NO** sustituye la presentación física de la escritura pública que contiene el poder

Este certificado se expide con destino al **INTERESADO**

Bogotá D.C., VEINTINUEVE (29) de JULIO de DOS MIL VEINTITRES (2.023)

Elaborado por: Cesar Angel

Sandra Jasmith Duarte Guerrero
Notaria Novena (9) del Círculo de Bogotá D.C. Encargada

SANDRA JASMITH DUARTE GUERRERO
NOTARIA NOVENA (9) ENCARGADA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.

NOTA: CUALQUIER CAMBIO O MODIFICACION QUE SE REALICE SOBRE ESTAS COPIAS ES ILEGAL
Y UTILIZARLAS ASI ES UN DELITO QUE CAUSA SANCION PENAL.

Avenida Carrera 20 No. 81-24 Barrio el Lago - PBX 7049839
Celular No. 318-8831698 - Email: notaria9bogotá@gmail.com
BOGOTÁ D.C.